

C.A. de Santiago

Santiago, dos de junio de dos mil veintiuno.

Al folio 20 y 21; a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece Juan Pablo Collao Arenas, abogado, en representación de Edgar Alexander Parra Rojas, de profesión Ingeniero en Informática, quien a su vez actuá por sí y a favor su esposa donã Maideling Del Carmen Dugarte Becerra, y de su hijo menor de edad, Josue Alexander Parra Dugarte, todos de nacionalidad venezolana, y domiciliados para los efectos de este recurso en Lord Cochrane 376, Dpto 1208, Comuna de Santiago Centro, Región Metropolitana, e interpone acción constitucional de amparo en contra de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de su director Julio Pedro Fiol Zuniãa, con domicilio en Teatinos 180, piso 5, Santiago; por privar, perturbar y amenazar el derecho constitucional de la libertad personal y seguridad individual de los amparados, establecido en el art.19 N° 7 letra a) de la Constitución Política de la Republica.

Indica que el recurrente en fechas 17 de junio de 2019 y 27 de junio de 2019, respectivamente, solicito para su esposa e hijo Visas de Responsabilidad Democrática al Consulado General de Chile ubicado en Caracas, Venezuela, a través del Sistema de Atención Consular, disponible en: <https://tramites.minrel.gov.cl/>, mientras aún se encontraba en el referido país a la espera del estampado de su propia visa, y una vez otorgada se dispuso a viajar e ingresar a Chile con el propósito de conseguir un empleo para brindarles a sus seres queridos un mejor futuro mientras llegaba el preciado momento de su reencuentro familiar, no obstante, de ese hecho ya han transcurrido casi dos años en los que han permanecido separados, siendo en la actualidad recurrente, titular de una solicitud de permanencia definitiva en el país acogida a trámite.

Indica que las referidas solicitudes de Josue Alexander Parra Dugarte y Maideling Del Carmen Dugarte Becerra, fueron recibidas satisfactoriamente por el ente recurrido en fechas 17 de junio de 2019 y 27 de junio de 2019, respectivamente, a las cuales se

le asignaron los números de Solicitud 511990 y 548531, y códigos FC7AEE7JXO5RVKIMOB y 7ORUQ8S5C99OW9YG99. Que se le informó que la cita del menor Joseu Alexander Parra Dugarte, seria en el Consulado General de Chile en Caracas y que debía presentarse el martes 03 de diciembre de 2019 de 8:30 a 10:00 am. Que luego de asistir a la cita acordada, el ente recurrido informo en fecha 22 de diciembre de 2019, que la solicitud del menor había sido aprobada, por lo que, para continuar con el proceso, debían proceder al pago de esta. Que en fecha 10 de enero del año 2020, le fue estampada Visa de Responsabilidad Democrática SAC 2310640, en la cual se indica que tenía hasta el 09 de abril de 2020 para ingresar a Chile.

Agrega que para el momento del estampado de la visa de su menor hijo, la amparada Maidelin Del Carmen Dugarte Becerra, aún se encontraba aguardando la asignación de su cita, y ante la preocupación y el desconcierto por el largo plazo de espera sin que hubiese un pronunciamiento al respecto, el recurrente envía correos electrónicos en fechas 01 de febrero de 2020 y 22 de febrero de 2020 dirigidos a la Secretaria Consular, Paola Alucema Reyes, exponiendo la preocupación por la demora ya que paralelamente estaba transcurriendo el plazo otorgado a su hijo menor para el ingreso a Chile, y no fue hasta el 26 de febrero de 2020 cuando se le informa que la cita fue programada para llevarse a cabo entre el lunes 09 de marzo y miércoles 11 de marzo de 2020, entre las 08:30 y las 09:30 horas. Que la amparada acudio a la cita según lo programado, consignado a tales efectos los documentos originales solicitados y pasado unos días la solicitud avanzo al estado de IMPRIMIR VISA, sin embargo antes que pudiera avanzar a la última etapa del procedimiento, esto es, “Esperando Retiro por Ciudadano”, se declaran estados de excepción tanto en Chile como en Venezuela, con las consecuentes medidas de cierre de fronteras y suspensión de vuelos comerciales, así como de otras medidas restrictivas como las cuarentenas, por efecto de la emergencia sanitaria que afecto al mundo entero por el COVID-19. Que como consecuencia de lo anterior, la amparada se vio en la imposibilitados de retirar su pasaporte del Consulado y viajar a Chile junto a su hijo menor con el fin de activar sus respectivas visas consulares por un hecho fortuito o causa mayor, a pesar de que como ya fue señalado su visa había sido aprobada y pagada.

Expone que el recurrente y su esposa decidieron esperar los meses que fueran necesarios para continuar adelante con la solicitud, y en ningún caso renunciar a su visa. Que no obstante, pese a que los amparados no podían hacer más que esperar que la situación se regularizara, en fecha 11 de noviembre de 2020, el ente recurrido remitió correo electrónico donde de forma arbitraria e ilegal, rechaza la solicitud de visa de responsabilidad democrática de la amparada después de haber estado aprobada, y en consecuencia cerro el trámite.

Concluye que lo anterior a todas luces materializa una actuación por parte de la autoridad consular violatoria de derechos fundamentales, además de ilegal y arbitraria, por cuanto, en el presente caso y al momento del cierre de dicha solicitud, es decir, en fecha 11 de noviembre de 2020, era de público conocimiento, que en fecha 23 de noviembre de 2020, se abrirían las fronteras aéreas en Chile, conforme lo establecía el Decreto Supremo N° 500, promulgado en fecha 05 de noviembre de 2020 que modificó el Decreto Supremo No 102, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Que desde esa misma fecha las autoridades venezolanas levantaron la restricción para operar en espacios públicos, permitiendo al Consulado General de Chile en Caracas funcionar en un sistema 7x7, es decir, 7 días de atención y otros 7 de cierre, conforme a los propios dichos del entonces Director General de Asuntos Consulares.

Concluye que lo anterior le produce un grave perjuicio por cuanto por una parte su menor hijo cuenta con una visa de responsabilidad democrática que si bien fue estampada, no pudo ser activada ya que venció durante el cierre de frontera toda vez que la solicitud de su progenitora se extendió por más de 9 meses a pesar de haber sido solicitadas con muy pocos días de diferencia, y cuando por fin se le asignó la cita se revisaron los documentos, se aprobó la solicitud, ésta no pudo avanzar producto de la suspensión de actividades en el marco de la emergencia por covid-19, posteriormente una vez reactivada las funciones, la solicitud en vez de avanzar a estatus de retiro de visa por ciudadano como correspondía, le fue rechazada de manera arbitraria.

Estima vulnerado el principio de Confianza Legítima.

Asevera que la resolución consular de rechazo no fue nunca remitida a la amparada, empero, en el correo electrónico de fecha 11 de noviembre de 2020, se observa como la autoridad consular expone los motivos o causales por las cuales realizó dichos rechazos. Que el correo antes citado fue enviado de manera masiva a todos los solicitantes que tenían una visa de responsabilidad democrática en trámite.

Cita el Decreto N° 1094 de 1975 que establece normas sobre extranjeros en Chile (Ley de Extranjería); el Decreto N° 597 del Ministerio del Interior de 1984 (Reglamento de Extranjería), el Decreto No 172 del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1977 (Reglamento Consular de Chile). Cita el Oficio Circular N° 96, de fecha 9 de abril del 2018 y el Oficio Circular N° 274 de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Cita el artículo 3 y 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Cita tratados internacionales suscritos por Chile. Cita el artículo 19 n° 7 y 21 de la Constitución Política de la República. Cita jurisprudencia (sentencia en causa Rol N° Amparo-2924- 2020 y Rol Amparo N° 3087- 2020 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago)

Solicita, tener por interpuesta Acción Constitucional de Amparo en contra de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a su director Julio Pedro Fiol Zúñiga, y en definitiva, declarar que los amparados se han visto vulnerados en su derecho a poder trasladarse y reunificar su núcleo familiar, en virtud de las limitaciones arbitrarias e injustificadas impuestas por el ente recurrido al impedir su ingreso al país contraviniendo el principio de protección a la familia y como pretexto de su inobservancia a los principios que rigen las actuaciones de los órganos de la administración pública, aunado al agravante de no hallarse presto a adoptar las medidas necesarias que permitieran subsanar dicha situación, sirviéndose notificar los recurridos a futuro, para los efectos legales subsiguientes.

Segundo: Que evacuó informe el señor Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior, señalando Aduce que mediante Decreto Supremo N° 104 de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, declaró estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Que a través del Decreto Supremo N° 102, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se

dispuso -en lo que interesa- el cierre de todos los lugares habilitados para el tránsito de extranjeros hacia el territorio nacional. Que mediante el Decreto Suprema N° 500, de 2020, del mismo origen, se modificó el citado Decreto Supremo 102. Que dicha norma mantuvo el cierre de los restantes lugares habilitados para el tránsito de pasajeros hacia el territorio nacional (puertos terrestres, marítimos y aéreos), y que por tanto existió un periodo de al menos 8 meses en que el ingreso de extranjeros no residentes estuvo prohibido, por el cierre de los referidos terminales y pasos fronterizos que permitieran su ingreso al territorio nacional.

Afirma que las oficinas consulares deben observar las normas y leyes del Estado receptor, a objeto de dar cumplimiento, entre otras disposiciones, el artículo 55 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que dispone la obligación internacional para el Estado de Chile de cumplir las normas del Estado receptor (en este caso, Venezuela), cuya infracción conlleva responsabilidad internacional para el país acreditante, fuera de sus implicancias que conllevaría la desatención de esa norma desde la órbita diplomática, como también de la buena fama o reputación de la República de Chile en la esfera internacional.

Manifiesta que con fecha 13 de marzo de 2020, y a través del Decreto N° 4.160, de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela -y sus sucesivas prórrogas-, se estableció en ese país el estado de alarma para todo su territorio, en atención a las circunstancias excepcionales, extraordinarias y coyunturales.

Asevera que la adopción de las normas por la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento a lo previsto en el citado artículo 55 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, tienen incidencia directa y necesaria en torno al otorgamiento de visas por parte del Estado de Chile en dicho país, pues si bien la solicitud puede iniciar telemáticamente el procedimiento de rigor, la revisión presencial de los documentos conexos a la petición es esencial y determinante para su resolución, por lo que ante las medidas dispuestas por las autoridades locales, no fue posible continuar la sustanciación del procedimiento de forma regular, atendida a la interferencia regulatoria de esas autoridades a partir de la declaración del Estado de Alerta.



Señala que el procedimiento administrativo sobre otorgamiento de visas reviste una naturaleza mixta -es decir, en parte requieren actuaciones que debe realizar presencialmente el interesado o los miembros de la Misión Consular y, por otra, constancias e informes por escrito o por vías electrónicas-. Que en el caso particular de los solicitantes de la VRD, los interesados -dentro del periodo que se ha pretendido objetar- podían iniciar el respectivo procedimiento administrativo en forma presencial; como también se encontraban en la obligación de proporcionar a la autoridad consular de Chile en Caracas -también en forma presencial- al menos el certificado de antecedentes penales (con una caducidad de 90 días, acorde a la normativa venezolana); y que, en el evento de obtener una decisión favorable, les correspondía pagar en dependencias consulares el respectivo arancel, requerir la impresión de la visa de residencia en etiqueta autoadhesiva y las respectivas cédulas consulares, fuera de que se disponga el estampado de la misma en el o los pasaportes.

Advierte que como consecuencia de las medidas restrictivas adoptadas por Venezuela (sistema de funcionamiento por turnos, consiste en un plan para orientar el trabajo de la población durante siete días continuos por siete días de cuarentena), el aludido Consulado General no pudo atender público de forma presencial entre los meses marzo y octubre de 2020, unido a la circunstancia de que se había dispuesto la prohibición de ingreso de extranjeros al país. Que esta imposibilidad generó como resultado que se acumulara un importante número de solicitudes nuevas que -atendidas las circunstancias- no era posible tramitar. Posteriormente, luego de la información recibida por la Cancillería venezolana, fue posible continuar con los tramites presenciales que las solicitudes de visa requieren, dando así continuidad a la revisión física de los documentos y la citación de las personas que ello conlleva, observando que la dotación del Consulado es baja.

Afirma que la subsecretaría de relaciones exteriores estableció una serie de medidas de prevención sobre COVID-19, disponiéndose la realización de labores indispensables para el Servicio, enfatizándose la necesidad de atender debidamente -y con cierta premura- la prestación de auxilios a los connacionales en el exterior que se encontraban en situación de necesidad, realizar las gestiones necesarias para disponer

el regreso de los mismos al país y la gestión de retiro de los ahorros previsionales a través de los Consulados.

Hace presente que el correo electrónico no constituyó más que la comunicación de un cierre o suspensión informática, debido a la necesaria priorización de labores que tuvo que efectuar la secretaría de estado, debido a la crisis sanitaria, la cual produjo amplia congestión en la tramitación de permisos consulares. Que junto al correo se comunicó públicamente la priorización de la tramitación de las VRD de reunificación familiar.

Sostiene que el correo electrónico no debe ser considerado como acto administrativo terminal, por cuanto el mismo constituye una sola comunicación para atender la situación general de caso fortuito o fuerza mayor. Que para que surta efectos el acto administrativo que aún no se ha dictado (sea que tenga un resultado favorable o desfavorable con respecto a un interesado), aquél debe ser notificado en los términos que franquea el artículo 46 y 47 de la Ley N° 19.880.

Asevera que la comunicación en cuestión carece de identidad con la noción de acto administrativo, como pretende hacer valer la recurrente en estos autos, ya que la actividad jurídico administrativa radica exclusivamente en el jefe de la representación consular, la cual sucede de la cognición requerida para materializar formalmente ese acto, que no es otro que una resolución fundada que deba cumplir las exigencias previstas en los artículos 11 y 41 de la citada Ley N° 19.880, mas aun aquél que pudiera generar un efecto desfavorable respecto al interesado.

Insiste en que no se ha concluido el procedimiento de tramitación de VRD, como insinúa la actora asignándole un valor jurídico al correo electrónico comunicado.

Expresa que -, si se ordenare el otorgamiento de la VRD al recurrente -si así hubiera solicitado- resultaría en una omisión de relevantes requisitos legales, ya que las restricciones sanitarias existentes tanto en Chile como en Venezuela hacen imposible tanto para los requirentes como para el Estado cumplir con las exigencias que establece la normativa nacional para el otorgamiento de este tipo de visado.

Sostiene no corresponde que el Estado, en función del principio de servicialidad, acorde a la Constitución Política de la Republica y las leyes, exponga al administrado



de haberse expuesto a los efectos de un procedimiento administrativo que la Administración del Estado sabe que le será negativo, por circunstancias que no son imputables a él. Que el funcionario consular no puede soslayar la revisión del certificado de antecedentes, ya que, existe una norma de rango legal que lo obliga a realizarla, además, del control de vigencia del certificado de antecedentes, debe cautelar que, más allá de toda duda razonable, entre otros aspectos, el solicitante de visa no presente antecedentes penales. Que al momento de formular su solicitud de visa el solicitante debe presentar un certificado de antecedentes. y cuya duración, es de un máximo de tres meses, certificación que hubiera perdido su vigencia, debiendo la autoridad consular rechazar ese requerimiento en conformidad a lo dispuesto en el artículo 55 de la CVRC.

Esgrime que la administración puede funcionar con normalidad en la medida que disponga de los medios para ello. Que la administración se ha topado con diversos obstáculos impeditivos para prestar el normal servicio de tramitación de las VRD a los nacionales de la República Bolivariana de Venezuela durante el año 2020. Que resultaba del todo imposible atender en condiciones de regularidad, al menos, las solicitudes de VRD formuladas, esencialmente, en la jurisdicción del Consulado General de Chile en Caracas.

Estima que el derecho alegado por la recurrente no es indubitado. Que no se ha configurado el derecho constitucional del artículo 19 N° 7 letra a) de la Constitución Política de la República de ingresar a Chile; por cuanto éste establece que las personas tendrán el derecho de entrar y salir del territorio de la República en la medida que cumplan con las normas establecidas en la ley y salvando siempre el perjuicio de terceros.

Considera que el recurso de amparo no es procedente ya que los amparados no se encuentran arrestados, detenidos o presos. Que la improcedencia de este recurso ha sido establecida por los Tribunales Superiores de Justicia.

Hace presente que, mediante el Decreto Num. 82 de 1 de abril de 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Gobierno de Chile estableció como



medida a partir del 5 de abril de 2021 el cierre de fronteras durante abril para enfrentar la pandemia de COVID-19.

Finalmente señala que corresponde informar a la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior por los Consulados de Chile en el Exterior y por el Ministerio de Relaciones Exteriores en estas materias.

Solicita rechazar, en todas sus partes, la presente acción constitucional, por cuanto:

a) El proceso administrativo de tramitación de la visa solicitada aún no ha concluido. Requiriendo los elementos de cognición necesarios para una acertada resolución del asunto.

b) La Administración en general, y el Servicio Consular de Chile en el exterior en particular, no han podido funcionar con normalidad durante los años 2020 y 2021, debido a las restricciones sanitarias vigentes en Chile y en Venezuela.

c) El derecho alegado por la recurrente no es indubitado, más aun si la esfera de libertad ambulatoria reclamada se encuentra delimitada conforme a los contornos que la Carta Fundamental prevé sobre el particular.

Tercero: Ampliando el informe, la requerida señala que respecto de la resolución del 26 de mayo no existen visas previamente aprobados por la institución, considerando que la aprobación va de forma copulativa con el estampe y entrega de la visa. Que en el caso del niño Josué Parra Dugarte, se consigna en el sistema SAC entrega de visa con fecha 12 de marzo de 2020 (Nro. Solicitud 2310640. Trámite Residente Temporario Titular, Res. Democrática Estado Cerrado. Interesado PARRA DUGARTE, JOSUE ALEXANDER).

Cita el artículo 14 del Decreto 597 que regula el Reglamento de Extranjería.

Agrega que respecto de la señora Maideling del Carmen Dugarte, su solicitud en el sistema SAC de fecha 28 de febrero de 2020 aún se encuentra en tramitación. Que sin embargo, su cónyuge para el caso particular de autos, ha presentado al Ministerio de Relaciones Exteriores la solicitud prioritaria de Visa de Responsabilidad Democrática de reunificación familiar, mediante carta de fecha 23 de noviembre de 2020, la que fuera públicamente referida por esta Secretaría de Estado como prioritaria para la gestión

PTHNXMW

consular de Chile para este año 2021. Que por tanto, los trámites administrativos que interesan a la recurrente están plenamente vigentes, y han sido preferidos por sobre otros trámites consulares ordinarios que practica el Servicio Exterior de Chile.

Cuarto: Que, según dispone el artículo 21 de la Constitución Política de la República, todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija.

El mismo recurso y en igual forma, termina el precepto, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Quinto: Que, conforme lo dicho y de la atenta revisión del contenido de las alegaciones consignadas en las presentaciones de ambas partes, al tratarse lo cuestionado de una decisión de la autoridad competente respecto de las solicitudes de visas de responsabilidad democrática del hijo menor, la cual fue concedida 10 de enero del año 2020 (quien sin embargo no habría ingresado en el plazo establecido, esto es 09 de abril de 2020), y de la madre estando pendiente aún la tramitación de su visa democrática, todo con arreglo a disposiciones legales y administrativas en que se funda, respecto de ciudadanos extranjeros que actualmente no residen en Chile, sin que ninguna de ellas se encuentre arrestada, detenida o presa con infracción de lo

dispuesto en la Constitución o en las leyes, no se advertirte en la especie, la existencia de una privación, perturbación o amenaza a su libertad o seguridad, por lo que, al no darse el supuesto básico que hace procedente la vía ejercida, el presente recurso no podrá prosperar, sin perjuicio de las demás vías jurisdiccionales y/o administrativas que puedan corresponder al efecto, no resultando necesario pronunciarse sobre las demás alegaciones planteadas por las partes.

Sexto: Que, de lo antes expuesto se colige que, no existe la actuación arbitraria o ilegal por parte de la recurrida que se denuncia, desde que ello corresponde a actos emanados de autoridad competente, en casos previstos por la ley, y en el marco de las facultades que la misma normativa establece.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **se rechaza, sin costas**, el recurso de amparo deducido en favor de donã Maideling Del Carmen Dugarte Becerra, y de su hijo menor de edad, Josue Alexander Parra Dugarte, todos de nacionalidad venezolana, en contra de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelar.

Amparo Rol N° 1375-2021.



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maria Soledad Melo L., Gloria Maria Solis R., Inelie Duran M. Santiago, dos de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a dos de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>